

ello genera un crédito fiscal a favor de las PYMES cuya devolución en el término de 90 días contempla la propia resolución, en los hechos, los trámites realizados por numerosas empresas ya llevan más de un año de duración y la DGI no ha devuelto un solo peso. Al actuar de esta forma, la tasa efectiva de imposición de IVA que alcanza a estas empresas constituye una exacción y una absorción de parte del capital de trabajo de las firmas.

Por detrás de este accionar de la DGI se encuentra el panorama de dificultades fiscales que la conducción económica no logra revertir. Aunque la recaudación se ha incrementado en los últimos dos meses, la mayoría de los analistas coinciden en que todavía existen fuertes dudas respecto de que se pueda cumplir con todo el acuerdo firmado con el FMI. En particular, porque los recursos no reaccionan a la tasa requerida para cumplir con las metas pactadas. De ahí, entonces, iniciativas como la de gravar con ganancias a los reintegros y reembolsos, y el establecimiento de mecánicas administrativas que, en los hechos, implican maximizar los ingresos de caja de la DGI.

El problema es que ello se hace desestimulando una fracción no desdeñable de las exportaciones argentinas —sentando además un precedente lamentable e irreparable respecto de la naturaleza de los reintegros y reembolsos— y castigando a un segmento del aparato productivo del país que genera una proporción elevada del valor agregado y ocupa a la mayor parte de los trabajadores.

Por las razones expuestas es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que brinde una respuesta positiva al reclamo planteado.

Juan P. Baylac. — Humberto J. Roggero. —
Jesús Rodríguez. — Francisco U. Fragozo.
— Roberto S. Digón. — Marcelo J. A.
Stubrin. — Eduardo R. Mondino.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º — Derógase el artículo 132 del Código Penal.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación y archívese.

Carmen del Rosario Caillet.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto pretende la derogación del artículo 132 del Código Penal con lo que se eliminaría una norma que además de anacrónica e injusta es visible reflejo de una hipocresía inconcebible en la sociedad contemporánea.

En efecto, esta norma exige para despenalizar al responsable de una violación, estupro, rapto o abuso que la ofendida elija libremente contraer matrimonio con el autor.

Puede colegirse sin equivocación, que en la realidad jamás podría considerarse esto como una libre opción, puesto que siempre será una decisión, consecuencia del abuso.

Además constituye una burla a la institución matrimonial a la que debe accederse por la vía de un acuerdo y un proyecto en común de formación de una familia por parte de la pareja y no ser la consecuencia de una acción delictiva.

Y lo más grave del caso lo constituye el hecho de que en el supuesto de que en la violación o abuso hubiesen intervenido varias personas, el "matrimonio" de la víctima con uno de los autores genera la impunidad de todos.

Este tipo de normas está siendo erradicada de las legislaciones actuales atendiendo a la sugerencia de las distintas convenciones tales como las de México en 1975, Copenhague en 1990, Nairobi en 1985 y Beijing en 1995, sobre eliminación de todas formas de discriminación de la mujer.

Ultimamente la Convención Interamericana para la Prevención, la Sanción y Erradicación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará de 1994, cuestiona el hecho de que en algunos países el sistema jurídico permite la impunidad si el que abusa se casa con la víctima. Por eso la reforma legal y la adaptación y promulgación de leyes nacionales para dar efectividad a la Convención de Belém do Pará son de prioridad absoluta.

Carmen del Rosario Caillet.

—A las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad.

64

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que a través de la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos informe sobre los siguientes aspectos relativos al cumplimiento del decreto 647/95, régimen para la renovación de vehículos (plan canje):

1º —Cuál ha sido el resultado de dicho régimen, remitiendo cantidad de vehículos vendidos bajo dicha modalidad.

2º —Grado de incidencia que ha tenido dicho régimen en la producción y venta de vehículos.

3º —Nómina de los centros de desguace y destrucción de vehículos que se han habilitado.